

Recurso nº 338/2024

Acuerdo, de 29 de agosto de 2024, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la mercantil SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A., contra el Acuerdo de fecha 29 de agosto de 2024 por el que se adjudica el contrato basado en Acuerdo Marco denominado "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS DE PANTALLA INTERACTIVA Y WEBCAM PARA AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS BAC12_2024", licitado por la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España-Financiado por la UE-NEXT GENERACIÓN EU.

El 8 de agosto de 2024 la mercantil SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A., interpone recurso especial en materia de contratación ante este Tribunal contra el acuerdo de adjudicación del contrato basado referido en favor de COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A., solicitando medida cautelar de suspensión de la tramitación del procedimiento.

La impugnación se fundamenta en la indebida adjudicación del contrato al entender la recurrente que la adjudicataria se encuentra en la prohibición de contratar establecida en el artículo 71.1.d) de la LCSP, al no disponer de Plan de Igualdad.

El 16 de agosto de 2024 el órgano de contratación remitió el expediente de contratación y el informe a que se refiere el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), no constando pronunciamiento alguno en relación con la solicitud de medida cautelar.

Tratándose de un recurso interpuesto contra la adjudicación de un contrato basado, no opera la suspensión automática de la tramitación del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la LCSP, sin perjuicio de las medidas cautelares que pueden adoptarse en virtud de lo señalado en el artículo 56.3.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un contrato basado financiado por la UE (Fondos Next Generation EU) - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ya ha sido adjudicado, no resultando necesaria la formalización del contrato para su perfección, tal como señala el artículo 36 de la LCSP.

Por este motivo, entiende este Tribunal que sería conveniente suspender la ejecución del contrato a efectos de evitar no sólo indemnizaciones, sino asimismo problemas en la aplicación de los fondos europeos en caso de estimarse el recurso.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad:

ACUERDA

Adoptar medida de suspensión de la ejecución del contrato basado referido hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

LA PRESIDENTA EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL
(conforme artículos 3.7 de la Ley 9/2010 y 19.2 LRJSP)

Firmado digitalmente por: ARCOCHA GIMENEZ MILAGROS
Fecha: 2024 08 30 07:24